



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B
FMZ 61000378/2011

En la ciudad de Mendoza, a los días del mes de del año dos mil veinte, reunidos en acuerdo los señores miembros de la Sala "B", de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, señores doctor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, doctor Alfredo Rafael Porras, encontrándose vacante la Vocalía 1 de la Sala "B", procedieron a resolver en definitiva estos autos **FMZ 61000378/2011**, caratulados: **"COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROV. DE SAN LUIS c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL- MINIST DE JUSTICIA Y DD.HH. DE LA NACIÓN- UNIDAD DE INFORMACION FINANCIER s/ Proceso de Conocimiento- Ordinarios"**, venidos del Juzgado Federal de San Luis, a esta Sala "B", en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 265, contra la resolución de fs. 259/263 vta., por la que se resuelve: *"I.- Rechazar la excepción de falta de legitimación activa deducida por la accionada. II.- Hacer lugar a la demandada y declarar la inaplicabilidad de la Resolución N° 21/2011 de la Unidad de Investigación Financiera y sus anexos Colegio de Escribanos de la Provincia de San Luis y a los escribanos públicos con matrícula otorgada por ese Colegio. III.- Imponer las costas a la accionada objetivamente perdedora (Arts. 68 y ccts. CPCCN) IV.- Diferir la regulación de honorarios.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-"*

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Debe modificarse la sentencia de fs. 259/263 vta.?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y arts. 4° y 15° del Reglamento de esta Cámara, previa y oportunamente se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: doctor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, doctor Alfredo Rafael Porras y doctora Olga Pura Arrabal.

Sobre la única cuestión propuesta, el señor juez de cámara Dr. Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, dijo:

1) Contra la resolución de fs. 259/263 vta., cuya parte resolutive ha sido transcripta al inicio de este Acuerdo, interpuso recurso de apelación a fs. 265 el representante del Estado Nacional, siendo el mismo concedido por el juez de grado a fs. 267. Por los motivos brindados a fs. 275/308 vta., y que se dan por reproducidos en mérito a la brevedad, solicitó que se revoque la sentencia apelada.

Esta Cámara Federal –en su anterior integración- hizo lugar parcialmente al recurso, únicamente en lo atinente a las costas, confirmando la sentencia cuestionada en lo sustancial (fs. 384/388) y denegó el recurso extraordinario interpuesto con



posterioridad por el representante del ENA (v. fs. 350/351 vta.), quien acudió en Queja por Apelación Denegada ante la CSJN.

El Máximo Tribunal, a fs. 431/433 vta. declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto por la demandada y dejó sin efecto la sentencia apelada, disponiendo el dictado de un nuevo fallo con arreglo a lo allí dispuesto.

2) En dicho marco de apreciación, se advierte que la Corte por mayoría remitió a los fundamentos brindados en la causa “Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires” (Fallos: 341:1017), en virtud de que las cuestiones planteadas por el recurrente son sustancialmente análogas a las que allí fueron debatidas y resueltas.

En dicho precedente, el voto mayoritario: *“Las normas que imponen a los escribanos, bajo pena de multa, la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera la existencia de “operaciones sospechosas” de lavado de activos o financiación del terrorismo -arts. 20, inc. 12; 21, inc. b y 24 de la ley 25.246 y del art. 2, inc. e, de la resolución UIF 21/2011-, resultan compatibles con el principio de legalidad consagrado en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional”*.

“El principio de legalidad del art. 18 de la Constitución Nacional nace de la necesidad de que exista una ley que mande o prohíba una conducta, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido, y que además se establezcan las penas a aplicar, sin perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y un máximo” (Voto mayoritario de los jueces Highton de Nolasco y Rosatti).

“Tratándose de materias que presenten contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo” (Voto mayoritario de los jueces Highton de Nolasco y Rosatti).

“La mera indeterminación en el tipo sancionatorio administrativo no implica violación del principio de legalidad penal ya que no comporta, en sí misma, la habilitación implícita al órgano sancionador para llenarlo con el contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio, sino que se encuentra constreñido por el principio de razonabilidad” (Voto mayoritario de los jueces Highton de Nolasco y Rosatti).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B
FMZ 61000378/2011

“La reglamentación de la actividad del notariado se justifica por su especial naturaleza, pues la facultad que se atribuye a los escribanos de registro de dar fe a los actos y contratos que celebren constituye una concesión del Estado y permite, llegado el caso, su inhabilitación disciplinaria, ya que tiene su necesario correlato en las exigencias y sanciones que la reglamentación contiene, en el sentido de revocar aquel atributo cuando la conducta se aparta de los parámetros que la ley establece para tutelar el interés público comprometido”.

“Dada la especial naturaleza de la actividad de los escribanos, a quienes el Estado les concede la facultad de dar fe a los actos y contratos que celebren, resulta razonable otorgarles un rol preponderante en el sistema de prevención de lavado de activos, ya que sus conocimientos técnicos y experiencia profesional los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuando una transacción tiene indicios de vinculación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo” (Voto mayoritario de los jueces Highton de Nolasco y Rosatti).

“Si bien la ley 25.246 y sus reglamentaciones no establecen pautas objetivas -no parece posible realizar a priori una descripción acabada de todas y cada una de las operaciones de financiamiento del terrorismo y de lavado de activos que sea dable imaginar-, dado que el art. 303 del Código Penal permite comprender cuáles son las conductas punibles y delimita la tarea del profesional de derecho en su cometido de evaluar si la operación es o no sospechosa, el régimen legal impugnado satisface el requisito de ser previsible y no vulnera, por ello, el principio de legalidad” (fundamento del voto del juez Maqueda).

Trasladando dichas pautas al caso bajo estudio, estimo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia revocar la sentencia a fs. 259/263 vta., toda vez que no se ha puesto en evidencia una violación genérica a los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional por parte de la normativa cuestionada.

3) Respecto de la imposición de costas, tanto de primera (art. 279 CPCCN) como de segunda instancia, atento al resultado al cual arribo, corresponde imponerlas a la actora vencida (art. 68 del CPCCN).

De conformidad a lo expuesto en los párrafos precedentes voto por la afirmativa a la única cuestión planteada. Es mi voto.

Sobre la única cuestión propuesta, el señor juez de cámara Dr. Alfredo Rafael Porras, dijo: Que adhiere al voto que antecede, por sus fundamentos.



En mérito del resultado que instruye el acuerdo precedente, por unanimidad **SE**
RESUELVE: 1) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 265, revocar
la sentencia de fs. 259/ 263 vta. y en consecuencia RECHAZAR la demanda, con costas a
la actora vencida (art. 68 CPCCN). 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la
apelada vencida (art. 68 CPCCN).

Protocolícese. Notifíquese. Publíquese.

Fecha de firma: 21/05/2020

Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIA FERNANDA SEISDEDOS, SECRETARIA DE CAMARA



#8677759#255541019#20200520114635769



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B
FMZ 61000378/2011

CONSTE: Que, conforme Acordada nº 14/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Acuerdos nº 10.025 de esta Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, la presente causa queda habilitada a los fines de su tramitación, de acuerdo a los plazos establecidos en el ordenamiento procesal vigente.

Mendoza, de Mayo de 2020.

NOTIFICADO

Dr.:

Por: Actora

Fecha:

Hora:

NOTIFICADO

Dr.:

Por: Demandada:

Fecha:

Hora:

Fecha de firma: 21/05/2020

Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIA FERNANDA SEISDEDOS, SECRETARIA DE CAMARA



#8677759#255541019#20200520114635769

Fecha de firma: 21/05/2020

Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIA FERNANDA SEISDEDOS, SECRETARIA DE CAMARA



#8677759#255541019#20200520114635769